

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. presidente y ministros que formaron el tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron,—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre veintiocho de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustín Peralta*, oficial mayor.

## AMPARO.

*Juicio promovido ante el juzgado de Distrito de Toluca por los reos José Casto Gutierrez, José M. Lozano y Amado Nava, condenados á muerte como ladrones y plagiarios por el C. jefe político de Lerma, alegando que con los procedimientos del C. jefe político se violan las garantías consignadas en el artículo 2º fracción 5ª de la Constitucion federal.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. juez de Distrito.

El promotor fiscal dice: que ha visto el ocurso presentado por el C. Pomposo Ortega á nombre de los reos José Casto Gutierrez, Amado Nava y José Lozano, solicitando el amparo de garantías contra la sentencia de muerte que el C. jefe político de Lerma pronunció en contra de los expresados reos por los delitos de asalto, robo y plagio, en la sumaria que practicó de conformidad con la ley de 18 de Mayo último.

Ha visto tambien en el informe justificado, producido por la misma autoridad política de Lerma, negando que en su procedimiento haya violado garantía alguna de las que otorga la Constitucion federal.

El hecho que ha motivado la interposi-

cion del recurso de amparo, segun las constancias de los autos, se reduce á que, el día dos de Julio proximo pasado, á las once de la noche, fué asaltada y robada la casa de D<sup>a</sup> Josefa Fragoso, situada en la venta de Trejo en la municipalidad de Huisquilucan del Distrito de Lerma. La cuadrilla de ladrones se componia de seis hombres de á pié y de á caballo, entre los cuales iban los referidos Gutierrez, Nava y Lozano. Forzaron una ventana de la casa para poder penetrar á ella, y se robaron algunos objetos de ropa, un sombrero, un baquerillo y un caballo de la propiedad del C. Gabriel Medina.

Al retirarse los ladrones de la casa se llevaron consigo al citado Gabriel Medina, vendándolo y conduciéndolo para el interior del monte, en el que caminaron toda la noche hasta el día siguiente que logró escapárseles por causa de que se durmieron sin custodiarlo.

Es de advertir, que el espresado Medina se hallaba, la noche que asaltaron la casa de la Fragoso de tránsito en ella; y que la suma que los plagiarios le exigian por su rescate, era la de cuatro mil pesos, estrechándolo á que escribiera á su familia para que los entregaran.

Despues de una dilatada averiguacion que practicó el C. jefe político de Lerma, con fecha siete de Julio último, y con fundamento del artículo 23 de la Constitucion de la República, y artículos 2º y 3º de la ley de 18 de Mayo próximo pasado, condenó á Jose Casto Gutierrez y á José M. Lozano á la pena de muerte; y con fecha nueve de Agosto último, y por los propios fundamentos, condenó á la misma pena á Amado Nava.

El que responde, ha comprendido de la lectura del escrito de queja, que el apoyo de ella, se refiere á que la autoridad política de Lerma, en su procedimiento, se separó de los principios del derecho comun, pues en concepto de los quejosos, ni el delito ni los delinquentes aparecen bien justifi-

cados en la causa, concluyendo con sostener, que se ha violado en sus personas las garantías del artículo 20 de la carta fundamental.

El que lleva la voz, no está de acuerdo con la petición de los reos de este juicio; por que las garantías individuales del artículo citado, se hallan suspensas por el artículo 1º de la referida ley de 18 de Mayo, y en el caso que nos ocupa, el C. jefe político contra quien se ha producido la queja, ha obrado conforme á la ley.

El que suscribe, en virtud de lo espuesto, y con fundamento del artículo 1º fracción 1ª de la ley de 20 de Enero de 1869, pide al juzgado declarar: que la Justicia de la Union no ampara á los espresados José Casto Gutierrez, José M. Lozano y Amado Nava, contra la sentencia de muerte á que fueron condenados por la autoridad política de Lerma.

Toluca, Setiembre diez y seis de mil ochocientos setenta y uno.—*Ceballos.*

#### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Juzgado de Distrito del Estado de México.

Toluca, Octubre cinco de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por los reos José Casto Gutierrez, José María Lozano y Amado Nava, condenados á muerte por el C. jefe político de Lerma, como autores de los delitos de asalto, robo y plagio; siendo originarios y vecinos, el primero del rancho del Rincon y de diez y nueve años de edad; el segundo de Huisquilucan, á cuya municipalidad pertenece el Rincon, de edad de veintiseis años y el tercero del mismo pueblo y de veinticinco años. Visto el escrito del principio, en el que como fundamento de la solicitud y para demostrar que procede el amparo, se hace valer que ha sido violada la garantía que se contiene en la fracción 5ª del art. 20 de

la Constitucion general, haciéndose consistir la violacion en que la sentencia que manda aplicar la pena del último suplicio no ha recaído sino sobre pruebas incompletas, y por lo mismo insuficientes, toda vez que, ni se justificó el cuerpo del delito, ni los reos fueron sorprendidos infraganti delito, ni se obtuvo otra prueba que la que surge de la confesion de solo uno de ellos. y ademas, que no fueron oidos en defensa los procesados. Visto el informe justificado que rindió el citado jefe político, en el que procura fundar lo contrario, esto es, que no fué vulnerada ninguna de las garantías que otorga la carta fundamental; y visto por último lo pedido por el ministerio público, y lo alegado por los reos. Teniendo en consideracion,

Primero; que con sujecion á la ley de 20 de Enero de 1869, los tribunales de la federacion deben limitarse á investigar si con el acto reclamado se ha violado ó no alguna de dichas garantías, para proteger ó no al quejoso, sin estenderse como los tribunales superiores, cuando revisan el fallo del inferior, á juzgar de la justicia ó injusticia de una sentencia y de la observancia ó inobservancia de las ritualidades de un proceso.

Segundo; que los quejosos no han sido juzgados solo por robo, sino aun por el asalto y el plagio, verificado en la persona de Gabriel Medina, de quien se exigian por vía de rescato cuatro mil pesos en la venta de Trejo la noche del dia 2 de Julio último; en cuya virtud, aunque este juzgado no debiera limitarse á indagar si el hecho violaba alguna garantía, y aun cuando por esto fuere de tomarse en consideracion, como en los juicios criminales comunes, la falta de la justificacion del cuerpo del delito, que en el caso no es otra que la falta de comprobacion de la anterior existencia de la cosa robada para decir en esa virtud que no basta sin aquella la confesion del acusado; esto solo tendria fuerza legal respecto del robo, pero nunca con relacion al

asalto y plagio para los que la ausencia de esa comprobación nada quiere decir y en manera alguna influye, porque se trata de otros delitos y porque cuando la justificación del cuerpo del delito es la del delito mismo, es evidente que en la confesión del asalto y plagio está inhibida la comprobación del cuerpo de delito, si bien es cierto que pudo éste justificarse mejor reconociéndose por peritos la rotura de la ventana, y á ser posible, justificando la presencia de los asaltantes dentro de las piezas y la conducción del plagiado ó sea su ausencia de la casa robada, llevado por ellos por la fuerza.

Tercero; que no obstante que jamás debe exceder de tres días la detención de un procesado, que para que éste continúe preso debe proveerse el auto de formal prisión, y que para decretarlo debe haberse justificado previamente el cuerpo del delito y resultar algún dato contra el delincuente, por la ley de 18 de Mayo último está suspensa para los salteadores y plagiarios la garantía que otorga la primera parte del art. 19 de la Constitución federal, lo que además de la suspensión de la garantía consignada en la parte primera del art. 13 de dicha Constitución, dá idea de lo privativo y especial del modo de juzgar á los salteadores y plagiarios.

Cuarto; que no es uno solo el reo que está confeso en haber asaltado y robado la Venta de Trejo y en haber plagiado á Medina, sino que lo están los tres que han puesto en juego el recurso de amparo.

Quinto; que la garantía que en la fracción 5ª del art. 20 de la Constitución, vemos se otorga á los CC. y que tiene por objeto que al reo se le oiga en defensa por sí ó por persona de su confianza ó por ambos, está suspensa por la citada ley de 18 de Mayo, en cuyo caso no se viola dicho artículo por la supresión de la defensa, sino que se cumple con la ley y aun con la misma Constitución, art. 29, que faculta al primer magistrado de la nación para de-

cretar, de acuerdo con su consejo de Ministros y con aprobación del congreso de la Unión, la suspensión de garantías, con la primera, porque lejos de detallar el trámite de la defensa el cual no señala, si bien deja en libertad al reo para presentar y alegar cuanto conduzcan á su defensa, como lo hicieron los reos, pidiendo el examen que se verificó de diversas personas lo suprime cuando manda que el procedimiento sea sumario y verbal, y cuando en los verbales no ha tenido jamás lugar ese trámite propio solo y exclusivamente de los juicios escritos; y con la segunda, porque suspensa la garantía contenida en la 5ª fracción del art. 20, y vigente el artículo 29 y siendo una ley secundaria la citada de 18 de Mayo, emanada de dicho art. 29, se ataca éste respetando y cumpliendo aquella.

Sexto; que las defensas de que habla el art. 3º de la repetida ley de suspensión de garantías, no son otras que las que el reo durante la formación de la acta puede presentar, ora citando testigos, ora exhibiendo documentos, ora alegando razones ó hechos y justificándolos; pero nunca los que alegando por medio de defensor y de un trámite especial, tienen lugar en otros casos, porque á no ser así sería de todo punto imposible que para todo alcanzara el cortísimo período de tres días, dentro del que aun la sentencia debe pronunciarse, y está visto que en ese sentido y según aparece del testimonio agregado, no se obstruyó el derecho de defensa.

Sétimo; que es de tal manera especial y fuero del orden común el procedimiento en la averiguación que se instruye contra salteadores y plagiarios, que para decretarlo ha sido preciso suspender la garantía que entraña la 1ª parte del art. 13 de la carta citada, que no se ha cometido el conocimiento á los jueces letrados, conocedores del derecho y de la curia, sino á los jefes políticos, no obstante que á los ilustrados representantes en la Cámara, no se les ocultaba que aquellos carecen de esos co-

nocimientos de foro; y por último, que no les concedió el tiempo necesario para consultar, pero ni aun para sustanciar el proceso en una acta, dando una idea cabal del espíritu del citado art. 3º, la circunstancia de que acepte como juez aun al jefe de una fuerza aprehensora, en su caso, y aun á los jefes militares, sin embargo de que ni unos ni otros, sino en casos muy excepcionales, poseen la difícil ciencia del derecho, y acaso ni los conocimientos mas triviales relativos á la curia.

Octavo: que sobre ser la confesion en derecho uno de los medios de prueba, la confesion de los reos fué hecha en declaracion y á la vez que el art. 3º tantas veces citado de la ley de suspension de garantías no exige sino que el delito esté probado, sin entrar en distinciones ni hacer mencion de adminículos ni exigir previos requisitos, como sucede en el orden comun de proceder en materia criminal.

Noveno; que aun cuando por un momento y contra la mas palpitante verdad se quisiera suponer que la mente de ese art. ha sido franquearle al reo el paso para que pueda nombrar defensor y obligar al juez de la causa á que se ministren á éste los datos necesarios y oiga los alegatos que fueren de hacerse, jamas podria decirse que en el caso que provoca este fallo se habia vulnerado una garantía, sino que no se habia respetado una ley secundaria por obedecer la suprema ley que es la Constitucion general, (art. 126 de la misma,) la cual supuesta la suspension de las garantías del art. 20, está muy lejos de mandar que se oiga en defensa al reo.

Décimo; que no ha fulminado la ley la pena de muerte para solo los salteadores y plagiarios sorprendidos infraganti delito, sino aun para los que no son aprehendidos de ese modo, por manera que la diferencia entre los unos y los otros no produce otro resultado que el que dice relacion al modo de juzgarlos, pues en los unos falta la identificacion del individuo y en los otros llena

el objeto un procedimiento sumario y verbal.

Undécimo; que aun en el caso de que este juzgado no debiera ceñirse á lo que antes ha expresado, sino que cumpliera á su deber juzgar de la justicia ó injusticia de la sentencia, no podria dejar de tomar en consideracion que las confesiones de los reos están en efecto bien adminiculadas á la vez que bien probados algunos adminículos y robustecidos aquellos con la fama pública, pues como se vé, cuatro testigos respecto de todos los reos, tres respecto de Lozano, uno con relacion á Casto Gutierrez, y seis con referencia á Amado Nava, deponen que tienen fama pública de ladrones.

Duodécimo; siendo éste, así como el primero, quinto, sexto, sétimo y noveno los sustanciales, pues si el juzgado ha entrado en otras consideraciones, es solo á mayor abundamiento, que el recurso se apoye en la violacion, de la fraccion 5ª del art. 20 de la Constitucion, la cual no ha tenido lugar supuesta la ley que suspende las garantías individuales que otorga dicho art. cuya fraccion hubiera sido necesario estuviese viva para que pudiera ser violada.

Décimotercio y último; que bajo este supuesto y dándole al muy repetido art. 3º de la ley de 18 de Mayo último otra inteligencia mas amplia y libre en materia de defensa, que la que realmente debe dársele, resultará á lo mas que se ha infringido dicha ley, pero nunca que se ha violado una garantía consignada en la carta general, toda vez que dicha ley que es secundaria, no es parte integrante de la Constitucion, en cuyo caso no procede el amparo que solo tiene lugar cuando se viola por alguna autoridad alguna de las garantías otorgadas y no suspensas en el código fundamental de la República, y todo lo demas que considerar y ver convino. La justicia federal en el Estado de México, apoyada por la de la nacion, y con fundamento de todo lo expuesto y de los artícu-

los 19, 18 y 27 de la ley de 20 de Enero de 1869, Falla: que no ampara ni protege á los reos José Casto Gutierrez, José María Lozano y Amado Nava, contra las sentencias de muerte pronunciadas por el C. gefe político de Lerma, en la acta levantada en averiguación del asalto y robo verificado en la Venta de Trejo en la noche del día 2 de Julio último y plagio ejecutado á la vez en la persona de Gabriel Medina.

Segundo; que se haga saber esta resolución al C. promotor fiscal de hacienda por la secretaría y á los citados reos por medio de exhorto que se remitirá al C. juez del Distrito de Lerma, elevándose á continuación este expediente á la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previo testimonio que se deducirá de esta sentencia y que se remitirá á las redacciones del "Diario Oficial" de México y del periódico oficial de esta capital. El C. Lic. Ramon Ortigosa, juez de Distrito del Estado de México, definitivamente juzgando en primera instancia así lo sentenció y firmó. Doy fé.—*R. Ortigosa.*—*Lic. Francisco del Valle.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Octubre veintitres de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado de Distrito de Toluca, por los reos José Casto Gutierrez, José María Lozano y Amado Nava, contra la sentencia de muerte pronunciada contra los promoventes, por el C. gefe político de Lerma, alegando que con dichos procedimientos se han violado en sus personas las garantías consignadas en el art. 20 fracción 5ª de la carta federal de la República. Vistas las constancias de autos y

Considerando: que las garantías del referido art., aducidas por los peticionarios en su escrito de demanda, están suspensas expresamente por la ley de 18 de Mayo del

presente año para los ladrones y plagiaros. Con tales fundamentos, se decreta: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el juzgado de Distrito de Toluca, en 5 del corriente, que en su parte resolutive declara, en nombre de los poderes de la Union, que la justicia federal no ampara ni protege á los reos José Casto Gutierrez, José María Lozano y Amado Nava, contra la sentencia de muerte pronunciada por el C. gefe político de Lerma en la acta levantada en averiguación del asalto y robo verificado en la Venta de "Trejo" en la noche del 2 de Julio, y plagio ejecutado á la vez en la persona de Gabriel Medina.

Devuélvanse sus actuaciones al juzgado de que proceden con testimonio de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese y archívese á su vez el toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y firmaron.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Octubre veinticinco de mil ochocientos setenta y uno.—*Lic. Agustin Peralta*, oficial mayor.